

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



APELACION - SENTENCIA	
DEMANDANTE	BLANCA RUBY DEL SOCORRO TABORDA DÍAZ
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-019-2022-00021-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Reliquidación pensional; indexación primera mesada - actualización de los salarios base de cotización que se tuvieron en cuenta para calcular el IBL de la pensión de vejez del causante
DECISIÓN	Modifica y confirma

Medellín, veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **BLANCA RUBY DEL SOCORRO TABORDA DÍAZ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 008**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, resolver, por parte de este colegiado, el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la sentencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito el 22 de agosto de 2022, y, a su vez, conocer esa misma sentencia bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, conforme lo señalado en el art. 69 del CPTSS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, lo siguiente: El señor BERNARDO DE JESUS GOMEZ GOMEZ nació el 23 de diciembre de 1928; el SEGURO SOCIAL PENSIONES SECCIONAL ANTIOQUIA, por medio de la Resolución No. 02632 de 1989, le concedió pensión por vejez en cuantía de \$136.937, a partir del 13 de marzo de 1989; la normatividad aplicable es la establecida en el Decreto 2879 de 1985; el IBL se estableció en cuantía de \$163.020, un número de semanas cotizadas de 1151 y un porcentaje de liquidación del 84%; el señor GOMEZ GOMEZ falleció el 13 de diciembre de 1999.

Indica el introductorio que el SEGURO SOCIAL, por medio de la Resolución 008994 del 2000, concedió la pensión de sobrevivientes a su compañera, la señora BLANCA RUBY DEL SOCORRO TABORDA DIAZ a partir del 13 de diciembre de 1999, en cuantía de \$1.015.436; que la mesada pensional, para el mes de noviembre de 2020, se encuentra en \$2.283.925; que presentó reclamación administrativa a COLPENSIONES solicitando lo aquí pretendido obteniendo respuesta de dicha entidad por medio de la Resolución SUB 232325 del 21 de septiembre de 2021, en la que se dispuso negar la reliquidación solicitada.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE ORDENE a Colpensiones: Que reliquide la pensión de vejez del pensionado fallecido BERNARDO DE JESUS GOMEZ GOMEZ, de acuerdo con lo establecido en el DECRETO 2879 de 1985, en el entendido que la base salarial se indexe o se actualice al año

1989, ya que las últimas 100 semanas de cotización se realizaron en los años 1987, 1988 y 1989; a pagar la pensión de vejez con un 84% del ingreso base de liquidación según lo establecido en el DECRETO 2879 de 1985; a pagar el mayor valor de la pensión de vejez con el respectivo retroactivo, incluyendo las mesadas adicionales, a su compañera sobreviviente, la señora BLANCA RUBY DEL SOCORRO TABORDA DIAZ ya que la prestación se encuentra causada desde el año 1989, en el entendido que del retroactivo no le descuenten el 12% en salud porque es beneficiaria del artículo 143 de 1994 (SIC).

Pide también, que se condene a COLPENSIONES a pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 o, subsidiariamente, la indexación, así como también, pagar las costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, COLPENSIONES dio respuesta oportuna a través de su vocero judicial, manifestando frente a los hechos allí expuestos, que no le constan; se opuso a la prosperidad de las pretensiones, y propuso las defensas exceptivas que denominó: *“inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez post mortem; inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la ley 100 de 1993; cobro de lo no debido; prescripción; excepción innominada; compensación; e imposibilidad de condena en costas”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación y consulta, el juez a-quo en audiencia pública celebrada el día 22 de agosto de 2022, condenó a COLPENSIONES, a reajustar la mesada pensional que viene percibiendo la Sra. BLANCA RUBY DEL SOCORRO TABORDA DÍAZ, y, en consecuencia, dispuso que la demandada deberá cancelar a la actora, por concepto de retroactivo pensional cuantificado sobre la reliquidación pensional efectuada con relación a las mesadas comprendidas entre el 22 de julio de 2018 y el 31 de julio de 2022, la suma de \$61.630.054, valor sobre el cual, indicó, proceden los descuentos con

destino al sistema de seguridad social en salud. Condenó a la demandada a que a partir del 1° de agosto de 2022 proceda a reajustar la mesada pensional que viene cancelando a la actora hasta la suma de \$4.283.075; condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la Sra. BLANCA RUBY DEL SOCORRO TABORDA DÍAZ la suma dineraria liquidada como retroactivo pensional en forma indexada; declaró probada la excepción denominada “inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993” y parcialmente probada la excepción de prescripción; absolvió a la demandada de las restantes pretensiones incoadas en su contra por la demandante, condenando en costas a la pasiva, fijando las correspondientes agencias en derecho.

Como fundamento de su decisión, para lo al recurso interesa, el juez de primer grado partió de señalar que el del Señor Jesús Gómez Gómez, en el año 1989, solicitó al Seguro Social el reconocimiento del derecho pensional, obteniendo respuesta positiva mediante Resolución 02632 del 23 de junio del año 89; que en el citado auto administrativo el Seguro Social tiene en cuenta un salario base de \$163,020 al cual al cual aplicó, según 1158 semanas cotizadas, una tasa de reemplazo del 84%, para una mesada inicial de \$136.937, todo con base en lo previsto por el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el decreto 2879 del mismo año, norma que en su artículo 1° determina precisamente cómo se liquida el salario base y cómo se establece el porcentaje o, tasa reemplazo a aplicar.

Indica que lo que está en controversia es el salario o ingreso base de cotización, pues la tasa de reemplazo de por sí aplicada era la establecida en el artículo primero del Acuerdo 029 del 85, norma que en lo pertinente dispone que el salario mensual de base es el que resulte de multiplicar por el factor 4.33 la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó en las últimas cien semanas de cotización, artículo que, considera no trae consigo un factor de corrección monetaria.

Luego de referirse a la figura de la indexación y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia, Sala de Casación laboral y de la Corte Constitucional sobre el tema, el fallador encontró procedente indexar los salarios

que sirvieron para establecer el salario base para el cálculo de la primera mesada pensional de la demandante, al año en que se reconoció y concedió la pensión de vejez, en el entendido que los salarios del 87 y 88 se actualizan al año 89 y los del año 89 permanecen iguales; que al hacer el cálculo correspondiente, se obtiene como resultado un salario base de \$209.839, lo que representa una mesada pensional, con una tasa de reemplazo del 84%, de \$178.275 para el año 89; al revisar el fenómeno de la prescripción, encontró que operó esta sobre los hechos sucedidos con antelación al 22 de julio de 2018. Que de acuerdo a las operaciones aritméticas pertinentes teniendo una mesada reliquidada para el año 2018 de \$3'726.320, y una mesada original de \$2'702.857, encontró una diferencia por ese año de \$1'024.263, que para los demás años dicha diferencia es menor, concluyendo que, para el año 2022, se tiene una mesada reliquidada de \$4'283.075, una mesada original de \$3'105.775, para una diferencia de \$1'177.500 mensuales; que, con esos cálculos, el retroactivo del 22 de Julio 2018 al 31 de julio del 2022 asciende a \$63'630.054.

VI. RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de Colpensiones apeló la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:

Hace alusión a la sentencia con radicado 33047 de la Corte Suprema de Justicia de 2008, magistrada ponente Elsy del Pilar Cuello Calderón, la cual señala que, sobre el tema en cuestión, la Sala de Casación Laboral ha reiterado en diferentes oportunidades que la actualización del ingreso base de liquidación de las pensiones tiene consideración legal desde la expedición de la ley 100 del 93; que está normativa no tiene efectos retroactivos.

Que, de acuerdo con lo anterior, pues no existe razón alguna para actualizar o indexar el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida al señor Bernardo de Jesús Gómez, por lo que solicita a este tribunal que se absuelva a Colpensiones de las condenas impuestas en la sentencia de primera instancia.

Alegatos de conclusión

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado de la demandante presenta alegatos de conclusión reiterando los supuestos fácticos y jurídicos de la demanda. Indica que, al haber una postura ambigua al interior de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL sobre el tema, solicita a este Colegiado que se acoja la postura asumida por la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL corporación que en múltiples providencias ha indicado que es procedente la indexación del salario base para la liquidación de la mesada pensional con la finalidad de proteger que las prestaciones sean reconocidas manteniendo su poder adquisitivo constante y el reajuste periódico, gracias a que la indexación procede para todo tipo de pensiones, sin importar el momento de su reconocimiento. Cita para tal fin las Sentencias SU~120 DE 2003, C-862 DE 2006, SU-1073 DE 2012, SU-131 DE 2013. También aduce que esa posición ha sido compartida por este Tribunal, en los siguientes procesos: Radicado 2017-00251, sentencia del 26 de noviembre de 2019, Magistrado ponente Dr. JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ; radicado 2019-00016, sentencia del 25 de noviembre de 2020, Magistrado ponente Dr. ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA; y radicado 2018-0399, M.P. GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ.

Por su parte el apoderado judicial de COLPENSIONES insiste en la improcedencia de la reliquidacon pensional deprecada, al considerar que quien reclama en este sentido, debe probar cuáles fueron los factores que no le fueron tenidos en cuenta en la liquidación inicial, y por supuesto debe demostrar qué pagos o valores eran procedentes legalmente, es decir, que hacían parte de la base para liquidar la pensión.

Y respecto a la indexación del IBL, expone que este solo es procedente cuando el derecho pensional se causa en vigencia de la Constitución Política de 1991, conforme lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en la sentencia con radicación 40.370 de 2012, por tratarse de prestaciones concretadas o consolidadas en vigencia de un orden jurídico distinto al que comenzó el 6 de julio de 1991, y para ese entonces, no existía normatividad legal o supralegal que lo permitiera, por lo

anterior no existe obligación alguna en cabeza de Colpensiones para con la señora Socorro Taborda y como lo subsidiario sigue la suerte de lo principal, no hay motivo alguno para reconocer retroactivo pensional.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Reliquidación pensional, actualización de los salarios base de cotización que se tuvieron en cuenta para calcular el IBL de la pensión que se le reconoció al causante.

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, consiste en determinar si la pensión de vejez otorgada al señor BERNARDO DE JESUS GOMEZ GOMEZ por el SEGURO SOCIAL PENSIONES SECCIONAL ANTIOQUIA, a través de la Resolución No. 02632 de 1989, se encuentra bien liquidada conforme la normatividad vigente para la fecha del reconocimiento (1989), esto es, el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, y si, como lo deprecia la activa, para dicha liquidación es procedente la indexación de la primera mesada pensional en el entendido que deben actualizarse, a la fecha del reconocimiento de dicha pensión, los salarios base de cotización que se tuvieron en cuenta para calcular el IBL de la pensión de vejez del citado señor; de ser viable lo anterior, se establecerá si hay lugar a la reliquidación de la mesada pensional que por vía de sustitución pensional le fue reconocida a la actora.

Para resolver lo pertinente valga precisar algunos asuntos que no resultan ser objeto de controversia en el proceso:

-Que mediante resolución 02632 de 1989, el SEGURO SOCIAL PENSIONES SECCIONAL ANTIOQUIA, le reconoció al señor BERNARDO GOMEZ GOMEZ una pensión de vejez, en cuantía mensual de \$163.180, a partir del 13 marzo de 1989, para su liquidación se tuvieron en cuenta 1151 semanas cotizadas, y un salario base mensual de \$163.020. Folios 19 y 20 PDF 02 DEMANDA, del expediente digital.

-También está probado en el plenario, que el pensionado BERNARDO GOMEZ GOMEZ falleció el día 13 de diciembre de 1999, y que la sustitución pensional le fue otorgada a su compañera permanente, la aquí demandante (junto a una hija menor de edad) mediante la resolución N° 008994 de 2000, a partir de la fecha de fallecimiento del causante y en cuantía mensual de \$1.015.436 (Fol. 22 a 23 de la misma carpeta PDF).

Frente al tema del presente asunto, debe recordarse que, según la jurisprudencia nacional, la indexación de la primera mesada pensional se produce cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio o desafiliación en un año determinado, el afiliado alcanza a completar los demás requisitos para acceder al derecho pensional cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro o desafiliación al sistema general de pensiones, de modo que con ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido detrimento debido al fenómeno inflacionario de la economía, el cual ocasiona sin lugar a dudas, la pérdida del poder adquisitivo del ingreso base con que se liquidó la pensión.

Para la Corte Constitucional, la indexación debe efectuarse, aunque no exista norma legal que disponga ese mecanismo, pues la obligación surge de los preceptos superiores, y por tanto, en ausencia de ley que lo disponga, es suficiente con aplicar los artículos 48 y 53 de la Constitución, así se indicó en la sentencia SU-542 de 2016, veamos:

“...La indexación de la primera mesada pensional es concebida como un instrumento que busca hacer frente al fenómeno de la inflación, el cual produce la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Así mismo, la actualización periódica de la mesada pensional es un mecanismo para garantizar el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, pues de lo contrario, la pérdida del poder adquisitivo de la misma les impediría satisfacer sus necesidades. Por tal razón, la indexación de la pensión es una medida concreta a favor de los pensionados, quienes, por regla general, son adultos mayores o sujetos de especial protección constitucional...”

Visto lo anterior, es claro entonces que la indexación de la primera mesada pensional es un derecho consagrado expresamente en el artículo 53 superior, e igualmente puede inferirse de una interpretación sistemática de distintos enunciados normativos constitucionales, como son la equidad, la dignidad, la igualdad, el derecho al mínimo vital, la teoría de los derechos adquiridos, entre otros preceptos de rango constitucional, los cuales configuran realmente un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional.

Ahora bien, como puede advertirse, lo solicitado por la activa en la demanda no es propiamente la indexación de la primera mesada pensional del señor Gómez Gómez, **sino la actualización de los salarios base de cotización que se tuvieron en cuenta para calcular el IBL de la pensión de vejez del causante, bajo la égida del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985**, normativa que indica:

ARTÍCULO 1o. La pensión mensual de Invalidez o de Vejez se integrará así:

- a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base, y*
- b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización.*

Para los efectos de este artículo, constituye salario mensual de base el que resulte de multiplicar por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó en las últimas cien (100) semanas de cotización. La pensión de Vejez o de Invalidez así integrada, no podrá en ningún caso exceder del 90% del salario mensual

de base teniendo en cuenta para su liquidación. En el caso que resulte inferior al salario mínimo legal vigente, se reajustará a su valor.

No desconoce esta Sala la Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional incluso para pensiones reconocidas con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991, que por cierto no es el tema objeto de este proceso por cuanto en el sub examine la pensión de vejez le fue reconocida al causante en el año 1989, en el mismo año en que este efectuó su última cotización, así como también, que ese alto tribunal ha accedido a la actualización de los salarios base de cotización que se tuvieron en cuenta para calcular el IBL de una pensión de vejez, indicando que dicha actualización procede para toda clase de pensiones; sin embargo, estima la Sala que la indexación que se reclama sobre los salarios semanales sobre los cuales cotizó el afiliado Gómez Gómez durante sus últimas 100 semanas, resulta improcedente, pues, tal y como lo tiene establecido la jurisprudencia del órgano de cierre en la especialidad laboral, precedente judicial que acoge esta colegiatura, la fórmula establecida en los reglamentos del ISS, entre ellos el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, que se utiliza para el cálculo de la prestación económica de vejez como la de autos, **tiene en cuenta el número de semanas y no el de salarios**, lo que imposibilita que el salario mensual base de cotización, como se denominaba en el régimen de los reglamentos del ISS antes de la Ley 100 de 1993, se indexe hasta la fecha de reconocimiento pensional.

En efecto, ese alto tribunal en la sentencia del 30 de agosto de 2011, con radicación 41.852, reiterada luego en las sentencias SL16727-2015, SL8306-2017, SL1186-2018 SL5152-2018, SL945-2019, SL2378-2020, y recientemente en la sentencia SI2106 de 2022, en el que en un caso de similares contornos al que nos ocupa, precisó:

“Al respecto, debe decirse que en incontables ocasiones esta Corporación ha sostenido que es improcedente la indexación de los salarios base de cotización de las pensiones de vejez regidas íntegramente por los reglamentos del ISS, entre ellos, el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de la misma anualidad, pues aquello lo prevé el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, previsión normativa que carece de efectos retroactivos.

Así, en la sentencia CSJ SL20125-2017, reiterada en la CSJ SL3108-2018, la Corte se pronunció sobre un asunto de similares contornos a este, en el que denunciaban la vulneración de algunas disposiciones normativas a las que se refiere el sub judice, y se fincaba en argumentos similares. En esa oportunidad, sostuvo esta Corporación lo siguiente:

Es cierto que la indexación no irrumpió en la legislación del país a partir de la Carta de 1991, ni tampoco que ésta Sala de la Corte no la hubiera reconocido antes de esa fecha, como equivocadamente lo puntualizó el Tribunal, pues con antelación a la vigencia de la actual Constitución ésta Sala ya se había pronunciado dando aplicación a la misma, para lo que basta remitirnos a la sentencia del 8 de febrero de 1996 radicación 7996, entre otras muchas, pero ello siempre ha sido bajo el concepto de ser un mecanismo con el cual se hace la corrección monetaria de las obligaciones que, debido al paso del tiempo, pierden valor adquisitivo.

No obstante la jurisprudencia reinante, que permite la corrección monetaria de las pensiones sin referencia a la fecha en que se causaron ni a si son de índole legal o convencional, la pretensión de la libelista no está llamada a prosperar porque, como ya se advirtió, en estricto sentido aquel no pidió la indexación de la mesada inicial, sino la reliquidación del IBL, adoptando para ello la actualización de los diferentes salarios sobre los que cotizó al ISS durante toda la vigencia laboral, para lograr la prestación que valga la pena anotar fue de vejez, no pensión - sanción como de manera equivocada lo dijo el juez plural.

Lo que se impetra entonces es la actualización del ingreso base de cotización aplicando una formula particular que para la fecha en que se causó la pensión, no estaba vigente, con lo cual se desconoce el efecto de la ley en el tiempo que prevé el artículo 16 del C.S.T al prohibir la retroactividad de las leyes laborales que, además, son de orden público; así se indicó en la sentencia SL8844 – 2017, 3 may 2017, rad. 55728, en la que a la letra se dijo:

[...]

Así las cosas y aunque en el artículo 21 de la Ley de seguridad social, se previó la actualización de los salarios o rentas sobre los que el afiliado cotizó durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación o durante toda su vida laboral, si ello le fuere más favorable, para lograr el ingreso base de liquidación de la primera mesada, ello opera para las pensiones causadas bajo dicha egida, circunstancia que no puede aplicarse a la demandante en tanto la fecha de causación de la prestación lo fue julio de 1982.

A la misma solución llegó esta Sala al estudiar una petición similar, pero frente a una pensión reconocida bajo los parámetros del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, norma que reprodujo el artículo 1° del Acuerdo 029 de 1985. Fue en la sentencia CSJ SL2808-2020 en la que puntualizó:

Con todo, debe recordarse que esta Sala de tiempo atrás ha precisado que es improcedente la indexación de los salarios base de cotización de las pensiones de vejez regidas íntegramente por el Acuerdo 049 de 1990,

dado que en el párrafo 1.º del artículo 20 de esta norma se consagra una fórmula exclusiva para calcular el monto de la mesada, conforme la cual «El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses»; es decir, que el valor se obtiene de acuerdo al número de semanas cotizadas y no conforme a los salarios devengados, tal como se expresó recientemente en sentencia CSJ SL4016-2019 [...].

El Tribunal tampoco podía acceder a lo pretendido echando mano del principio de favorabilidad, pues, a decir verdad, el asunto sometido a su escrutinio no ofrece duda alguna sobre la norma aplicable, ni sobre su interpretación.

Bastante se ha dicho que este postulado constitucional solo es aplicable cuando existe una duda real, seria, auténtica y objetiva que genere dos comprensiones o más de la misma disposición (in dubio pro operario), o se esté ante dos o más normas aplicables (regla más favorable), caso en el cual se debe optar por la interpretación o aplicación que más optimice la situación de la parte débil de la relación de trabajo (CSJ SL982-2021)."

En ese orden de ideas, considera esta colegiatura, con fundamento en el precedente judicial de la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia al que se hizo referencia, que acata y comparte, que no es posible la actualización de los salarios base de cotización que se tuvieron en cuenta para calcular el IBL de la pensión de vejez del causante, bajo la égida del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, como lo hizo el a quo. Es pertinente advertir que en la sentencia proferida por esta Sala, con ponencia del Dr. Orlando Antonio Gallo Isaza, de fecha 25 de noviembre de 2020 (Rad. 0500131050132019 00016 01), que aportó la activa con los alegatos de conclusión en esta instancia, contrario a lo dicho por el señor apoderado, no se acogió la tesis de la actualización de los salarios base de cotización que se tuvieron en cuenta para calcular el IBL de la pensión de vejez reconocida bajo los reglamentos del seguro social, en ese caso, el Acuerdo 049 de 1990.

No obstante lo anterior, toda vez que en la demanda se solicitó que se condene a Colpensiones a pagar la pensión de vejez del causante con un 84% del ingreso base de liquidación según lo establecido en el DECRETO 2879 de 1985, y que dicha normatividad era la vigente para la fecha en que se reconoció la pensión de vejez al señor Bernardo Gómez Gómez, procede la

sala a verificar si, efectivamente, la misma le fue reconocida en forma correcta, esto es, según lo establecido en el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, que indica:

ARTÍCULO 1o. La pensión mensual de Invalidez o de Vejez se integrará así:

a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base, y

b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización.

Para los efectos de este artículo, constituye salario mensual de base el que resulte de multiplicar por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó en las últimas cien (100) semanas de cotización. La pensión de Vejez o de Invalidez así integrada, no podrá en ningún caso exceder del 90% del salario mensual de base teniendo en cuenta para su liquidación. En el caso que resulte inferior al salario mínimo legal vigente, se reajustará a su valor.

Cabe señalar que el causante, para los años 1987, 1988 y 1989, devengó el mismo salario, que lo fue la suma de \$165.180, por lo que, al dividir ese valor entre las 4.29 que tiene un mes, a fin de aplicar la fórmula que trae la norma en cita, da un valor de \$38.503, que corresponde al valor del salario de una semana. Al multiplicar el salario de una semana por 100, da la suma de \$3,850.300, que dividida por 100, para buscar la centésima parte de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el causante en las últimas cien (100) semanas de cotización, se obtiene el valor de \$38.503, que multiplicado por el factor 4.33 que indica la fórmula, da la suma de \$166,780, que al aplicarle el 84%, en atención a las 1.151 semanas cotizadas que registra el causante, da una mesada pensional de \$140.043, que es mayor a la reconocida por el Seguro Social en su momento, que lo fue de \$136.937, por lo que hay lugar a la reliquidación de la sustitución pensional que se depreca, pero por un valor menor al reconocido por el a quo, teniendo en cuenta la prescripción parcial declarada por el a quo, que está bien aplicada, de acuerdo a la siguiente liquidación actualizada hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia :

año	lpc	mesada pagada	mesada debida de pagar	Diferencia	mesadas	subtotal
1989	26,1200%	P. vejez	\$ 140.043,00	prescripción	prescripción	prescripción
1990	32,3660%	P. vejez	\$ 176.622,2316	prescripción	prescripción	prescripción

1991	26,8240%	P. vejez	\$ 233.787,7842	prescripción	prescripción	prescripción
1992	25,1370%	P. vejez	\$ 296.499,0396	prescripción	prescripción	prescripción
1993	22,60%	P. vejez	\$ 371.029,9242	prescripción	prescripción	prescripción
1994	22,59%	P. vejez	\$ 454.882,6871	prescripción	prescripción	prescripción
1995	19,46%	P. vejez	\$ 557.640,6861	prescripción	prescripción	prescripción
1996	21,63%	P. vejez	\$ 666.157,5636	prescripción	prescripción	prescripción
1997	17,68%	P. vejez	\$ 810.247,4446	prescripción	prescripción	prescripción
1998	16,70%	P. vejez	\$ 953.499,1928	prescripción	prescripción	prescripción
1999	9,23%	\$ 1.015.436,0000	\$ 1.112.733,5580	\$ 97.297,56	prescripción	prescripción
2000	8,75%	\$ 1.109.160,7428	\$ 1.215.438,8654	\$ 106.278,12	prescripción	prescripción
2001	7,65%	\$ 1.206.212,3078	\$ 1.321.789,7661	\$ 115.577,46	prescripción	prescripción
2002	6,99%	\$ 1.298.487,5493	\$ 1.422.906,6832	\$ 124.419,13	prescripción	prescripción
2003	6,49%	\$ 1.389.251,8290	\$ 1.522.367,8604	\$ 133.116,03	prescripción	prescripción
2004	5,50%	\$ 1.479.414,2727	\$ 1.621.169,5345	\$ 141.755,26	prescripción	prescripción
2005	4,85%	\$ 1.560.782,0577	\$ 1.710.333,8589	\$ 149.551,80	prescripción	prescripción
2006	4,48%	\$ 1.636.479,9875	\$ 1.793.285,0511	\$ 156.805,06	prescripción	prescripción
2007	5,69%	\$ 1.709.794,2910	\$ 1.873.624,2214	\$ 163.829,93	prescripción	prescripción
2008	7,67%	\$ 1.807.081,5861	\$ 1.980.233,4396	\$ 173.151,85	prescripción	prescripción
2009	2,00%	\$ 1.945.684,7438	\$ 2.132.117,3444	\$ 186.432,60	prescripción	prescripción
2010	3,17%	\$ 1.984.598,4387	\$ 2.174.759,6913	\$ 190.161,25	prescripción	prescripción
2011	3,73%	\$ 2.047.510,2092	\$ 2.243.699,5735	\$ 196.189,36	prescripción	prescripción
2012	2,44%	\$ 2.123.882,3400	\$ 2.327.389,5676	\$ 203.507,23	prescripción	prescripción
2013	1,94%	\$ 2.175.705,0691	\$ 2.384.177,8730	\$ 208.472,80	prescripción	prescripción
2014	3,66%	\$ 2.217.913,7474	\$ 2.430.430,9238	\$ 212.517,18	prescripción	prescripción
2015	6,77%	\$ 2.299.089,3906	\$ 2.519.384,6956	\$ 220.295,30	prescripción	prescripción
2016	5,75%	\$ 2.454.737,7423	\$ 2.689.947,0395	\$ 235.209,30	prescripción	prescripción
2017	4,09%	\$ 2.595.885,1625	\$ 2.844.618,9942	\$ 248.733,83	prescripción	prescripción
2018	3,18%	\$ 2.702.056,8657	\$ 2.960.963,9111	\$ 258.907,05	6,3	\$ 1.631.114,39
2019	3,80%	\$ 2.787.982,2740	\$ 3.055.122,5635	\$ 267.140,29	14	\$ 3.739.964,05
2020	1,61%	\$ 2.893.925,6004	\$ 3.171.217,2209	\$ 277.291,62	14	\$ 3.882.082,69
2021	5,62%	\$ 2.940.517,8026	\$ 3.222.273,8181	\$ 281.756,02	14	\$ 3.944.584,22
2022	13,12%	\$ 3.105.774,9031	\$ 3.403.365,6067	\$ 297.590,70	14	\$ 4.166.269,85
2023		\$ 3.513.252,5703	\$ 3.849.887,1743	\$ 336.634,60	1	\$ 336.634,60
				\$ 17.700.649,80		

Por lo anterior, se MODIFICARÁ la sentencia de primera instancia en cuanto al valor adeudado a la demandante por retroactivo de la reliquidación pensional de la pensón de sobrevivientes, el cual asciende a \$17.700.689,80, liquidado entre el 22 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2023. Y a partir del 1º de febrero de 2023 la entidad demandada deberá continuar pagando a la actora una mesada pensional equivalente a \$3.849.997,17, sin perjuicio de los incrementos para los años subsiguientes.

Bajo el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, es pertinente señalar que esta colegiatura encuentra acertada la condena a la indexación de las sumas adeudadas por concepto de reajuste pensional, afin de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo, por lo que se CONFIRMARÁ la sentencia en este punto, al igual que el atinente a los descuentos en salud pues esa decisión no fue apelado por el demandante, quien era el interesado.

Sin costas en esta instancia, ante la prosperidad parcial del recurso de apelación propuesto por Colpensiones.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR, la sentencia objeto de apelación y consulta, en cuanto al valor adeudado a la demandante por retroactivo de la reliquidación pensional de la pensón de sobrevivientes, el cual asciende a \$17.700.689,40, liquidado entre el 22 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2023.

A partir del 1º de febrero de 2023 la entidad demandada deberá continuar pagando a la actora una mesada pensional equivalente a \$3.849.997,17, sin perjuicio de los incrementos para los años subsiguientes.

Lo anterior, por lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primer grado.

TERCERO: Sin Costas en esta instancia, por lo señalado en precedencia.

CUARTO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

QUINTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA